



Al servicio de la Justicia y de la paz social

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADO SUSTANCIADOR**  
**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

Medellín D.E. de C., T., e I., diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	Banco de Bogotá
DEMANDADO	Greco Asesores y otros.
PROCEDENCIA	Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín
CUDR	05001-31-03-006-2009-00643-01
RADICADO INTERNO	054-22
PROVIDENCIA	040-23
DECISIÓN	Cuando un proceso se haya emitido sentencia favorable al demandante, o auto ordenando seguir adelante con la ejecución, y permanezca inactivo en la secretaría del Despacho por más de dos (2) años, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, se le aplicará el desistimiento tácito. <b>CONFIRMA.</b>

**ASUNTO A RESOLVER**

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandada en contra del auto del seis de mayo de 2022, mediante el cual se negó el decreto de la terminación del proceso ejecutivo del Banco de Bogotá frente a Greco Asesores LTDA. y otros, por desistimiento tácito.

**ANTECEDENTES**

**1.- Hechos y pretensiones.** El Banco de Bogotá presentó demanda constitutiva de proceso ejecutivo en contra de Greco Asesores S.A.S., Elmer Torres Castro y Ninfa Margarita Greco Vergel, mediante la cual pretendió el recaudo de la obligación contenida en el pagaré número 4300006298-1, suscrito el siete de octubre de 2008.

**2.- Oposición y trámite.** Como los encausados fueron notificados de la

orden de apremio, pero no realizaron pronunciamiento alguno, se dictó auto de 11 de marzo de 2011, en el que se ordenó seguir adelante con la ejecución. Posteriormente el expediente fue remitido a los JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, para que continuaran conociendo del presente asunto, correspondiéndole al JUZGADO PRIMERO, el cual, por auto del 31 de marzo de 2014, avocó el conocimiento del proceso.

**3.- El auto apelado.** Luego de varios trámites procesales, la demandada Ninfa Margarita Grecco Verjel, en memorial del 15 de marzo de 2022, petitionó que se declarara la terminación del proceso por desistimiento tácito, con fundamento en el artículo 372 del C. General del Proceso y lo dispuesto en sentencia STC11191-2020 del nueve de diciembre de 2020, radicación n° 11001-22-01-000-2020-01444-01, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante providencia del seis de mayo de 2022, el *a quo* no accedió a la terminación del proceso por desistimiento tácito, toda vez que, la última actuación del proceso es de fecha 27 de septiembre de 2021, correspondiente al auto que reconoció personería al abogado que continuaría representando de los intereses de la parte demandante, considerando que dicho trámite interrumpió el término previsto en el literal b del artículo 317 del Código General del Proceso.

**4.- La apelación.** Oportunamente la solicitante interpuso los recursos de reposición, y en subsidio, de apelación, argumentando que las actuaciones realizadas en el proceso, a partir del 28 de abril de 2014, no tuvieron la vocación de impulsarlo, tal y como lo señaló la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC11191-2020.

Afirma que el auto del 27 de septiembre de 2021, aludido por el juzgado, no interrumpió del término previsto en literal b del artículo 317 del C. General del Proceso, es decir, no cumple con lo preceptuado por la Corte Suprema de Justicia, pues lo allí decidido no conduce a definir la controversia, ni pone en marcha procedimientos tendientes a la satisfacción de los perseguido con la ejecución.

Dijo que tampoco podía aducirse la imposibilidad de actuación por parte de la demandante por no estar reconocida la personería de su apoderado, por cuanto en el proceso existen tres apoderados de la actora; además, dicho reconocimiento no es obstáculo para que se intervenga en el proceso, pues tanto el poder como la

actuación pueden allegarse concomitantemente.

**5.- Decisión de la reposición.** En proveído del 21 de junio de 2022, el Juzgado de primera instancia mantuvo incólume la decisión cuestionada, aduciendo que cualquier solicitud o actuación de parte, sin importar cual sea, interrumpe el término que haya podido transcurrir, dándole una interpretación literal al precepto normativo establecido en el artículo 317 del C. General del Proceso. En consecuencia, concedió la alzada propuesta de manera subsidiaria.

## **CONSIDERACIONES**

**1.- Del Desistimiento tácito.** La terminación por desistimiento tácito se encuentra contemplada en el artículo 317 del Código General del Proceso, vigente a partir del 1° de octubre de 2012, por mandato del numeral 4° del artículo 627 de la misma obra.

De acuerdo con el citado precepto, el desistimiento tácito es la consecuencia jurídica que ha de aplicarse, a modo de sanción, respecto de la parte que promovió un trámite, pero no cumplió con una carga procesal -de la cual depende la continuación del proceso- y no la cumple en un determinado lapso (Numeral 1°, art. 317 C. G del Proceso), o cuando el proceso permanece inactivo, esto es, sin ninguna actuación, por el término de un (1) año en la Secretaría del Juzgado, antes de dictarse sentencia (Numeral 2°, *ibídem*), o una vez proferida ésta, o el auto ordenando seguir adelante con la ejecución de ser el caso, si dicha inactividad persiste por un período de dos (2) años (Literal b), numeral 2 del mismo Estatuto).

Dicha normativa establece los anteriores supuestos, pero con relación a cada uno impone ciertos mandatos para el Juzgado, al tiempo que consagra cómo la parte puede impedir la finalización del trámite. Ciertamente, en el primer motivo, la simple inactividad sin sentencia, la regla no contempla un tiempo específico para declarar el Desistimiento tácito, pero si establece que la forma de evitarlo es cumplir con la carga procesal pendiente, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento efectuado por el Juzgado para ese efecto.

En cambio, en las restantes causas se dijo cuál era el tiempo de inactividad, pero la superación de ésta se amplió a cualquier actividad, de cualquier naturaleza, desde luego, que impulsara el proceso, y sin que mediara requerimiento alguno. En esta medida, la parálisis de un año, sin sentencia, o de dos años, con sentencia,

obliga a verificar que la inactividad procesal sea total o, de haber actividad, ésta no conduzca a pasar el proceso de una etapa a otra.

Tal como viene de explicarse, el canon 317 del Código General del Proceso contempla tres presupuestos diferentes, para la procedencia de la terminación anormal del proceso por la figura de desistimiento tácito, atendiendo al estado en el que se encuentre el mismo. Ellos son, se reitera:

**- Cuando no se ha dictado sentencia y el proceso se encuentra pendiente de una actuación o impulso del promotor de la actuación.** En este caso, la norma establece un procedimiento previo a la terminación del proceso, consistente en el requerimiento que debe hacer el Juzgado a dicha parte para que proceda a cumplir con la carga que le corresponde en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la providencia que así lo disponga, so pena de declarar el desistimiento tácito.

**- Cuando no se ha dictado sentencia y el proceso permanece inactivo por un plazo de un año.** Para este evento, no exige la norma como presupuesto que el proceso se encuentre pendiente de una actuación de la parte actora, para continuar con la demanda, como si lo hace para el primero, simplemente que permanezca sin actuación de ninguna naturaleza, por ese período, pudiendo el Despacho proceder a la terminación del mismo por desistimiento tácito, sin requerimiento previo.

**- Cuando ya se ha dictado sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución y el proceso permanece inactivo por un período de dos años.** Al igual que el anterior, no se exige en este caso que el proceso se encuentre pendiente de alguna actuación de la parte, solo que no se genere ninguna actuación por ese lapso de tiempo, para declarar el desistimiento tácito.

En los dos últimos casos, el legislador no estableció como presupuesto o requisito que el proceso o actuación estuviese pendiente de una carga procesal o acto de la parte que la haya promovido, sino que solo hizo referencia a la inactividad del proceso, lo que permite colegir, que si bien legalmente no está la parte obligada a cumplir con alguna actuación, si es necesario que realice alguna, de la cual se pueda deducir su interés o atención el proceso, de tal manera que el Juez tenga certeza sobre su continua actividad, encaminada a lograr no sólo la obtención de

una resolución del conflicto, sino además, la efectividad de la sentencia o el pago de la prestación insoluta.

Es precisamente por esta razón que la misma preceptiva contempla como una de las reglas que deben atenderse para la aplicación de la figura del desistimiento tácito, que *“cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”*. Sobre este particular la Corte suprema de Justicia en sentencia STC11191-2020 del 9 de diciembre de 2020, Radicación no. 11001-22-01-000-2020-01444-01 definió:

*“...la “actuación” que conforme al literal c) del artículo 317 del Código general del Proceso interrumpe los términos para que se decrete su terminación anticipada es aquella que lo conduzca a definir la controversia o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer”. Es decir, la actuación debe ser “apta y apropiada para impulsar el proceso hacia su finalidad”, por lo que simples solicitudes de copias o actuaciones sin propósitos serios de solución a la controversia no tienen este efecto al no poner en marcha el proceso...”*

**2.- Caso concreto.** Ahora, en el asunto objeto de estudio, el problema jurídico a resolver será entonces, si la actuación correspondiente al reconocimiento de personería del abogado que continuaría representando a la parte ejecutante, que data del 27 de septiembre de 2021, tiene la entidad de interrumpir el término dispuesto en el artículo 317 del C. General del Proceso, para acceder a la terminación del proceso por desistimiento tácito.

Revisado el expediente digital allegado, se tiene que, por auto del 27 de septiembre de 2021, notificado por estados al día siguiente, se reconoció personería al abogado que seguiría representando a la parte demandante al interior del proceso, atendiendo la solicitud presentada el 13 del mismo mes y año.

No obstante, para la Sala, contrario a lo afirmado por el Juzgado de primera instancia, dicha actuación no es apropiada para otorgar impulso al presente proceso ejecutivo, que consiste en obtener el recaudo de la obligación de los acreedores; es decir, el reconocimiento de personería del abogado de la parte demandante no tiene la finalidad de dar solución al litigio y mucho menos lo puso en marcha, en tanto siguen en las mismas condiciones en que se encontraba antes de la presentación del poder, tanto más sí, luego del reconocimiento de personería al letrado, no hay peticiones tuyas, que si impulsen el trámite.

Es que el desistimiento tácito busca evitar la parálisis de los procesos, de manera que se conviertan en una carga para la administración de justicia y así disminuir la congestión de los despachos judiciales. Así lo estableció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, expediente STC11191-2020, donde señaló:

*«Mucho se ha debatido sobre la naturaleza del “desistimiento tácito”; se afirma que se trata de “la interpretación de un acto de voluntad genuino, tácitamente expresado por el solicitante” de “desistir de la actuación”, o que es una “sanción” que se impone por la “inactividad de las partes”. Su aplicación a los casos concretos no ha sido ajena a esas concepciones; por el contrario, con base en ellas se ha entendido que la consecuencia solo es viable cuando exista un “abandono y desinterés absoluto del proceso” y, por tanto, que la realización de “cualquier acto procesal” desvirtúa la “intención tácita de renunciar” o la “aplicación de la sanción”.*

*No obstante, quienes allí ponen el acento olvidan que la razón de ser de la figura es ajena a estas descripciones, pues fue diseñada para conjurar la “parálisis de los litigios” y los vicios que esta genera en la administración de justicia.*

*Recuérdese que el “desistimiento tácito” consiste en “la terminación anticipada de los litigios” a causa de que los llamados a impulsarlos no efectúan los “actos” necesarios para su consecución. De suerte que a través de la medida, se pretende expulsar de los juzgados aquellos pleitos que, en lugar de ser un mecanismo de resolución de conflictos se convierten en una “carga” para las partes y la “justicia”; y de esa manera: (i) Remediar la “incertidumbre” que genera para los “derechos de las partes” la “indeterminación de los litigios”, (ii) Evitar que se incurra en “dilaciones”, (iii) Impedir que el aparato judicial se congestione, y (iv) Disuadir a las partes de incurrir en prácticas dilatorias - voluntarias o no- y a propender porque atiendan con lealtad y buena fe el deber de colaboración con la administración de justicia...”*

A pesar de no compartirse los argumentos del juzgado de primer grado, considera la Sala que, hay lugar a la confirmación de la negativa de decretar la terminación del presente proceso ejecutivo por desistimiento tácito, por lo que pasará a explicarse.

Los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID 19, conforme a los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior del Poder Judicial, con números PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567. Luego existieron unas nuevas suspensiones de términos de manera esporádica, hasta el tres de julio de 2020, entre el 13 y el 26 de julio de 2020, entre el 31 de julio y dos de agosto de 2020, y, por último, del 7 al 09 de agosto de 2020, todas con ocasión a la aludida pandemia.

Mediante el Decreto 564 del 15 de abril de 2020, por medio del cual “se adoptaron medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se suspendieron los términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito, advirtiendo que: “se reanudarán un mes después, contado a partir del día siguiente al del levantamiento de la suspensión que disponga el Consejo Superior de la Judicatura”.

Bajo estos parámetros, obligatoriamente debe concluirse que, para el 15 de marzo de 2022, fecha en la que se presentó la petición de terminación del proceso por desistimiento tácito por la codemandada, incluso seis de mayo de la misma anualidad, cuando se resolvió lo deprecado, no había fenecido objetivamente el interregno de dos años de inactividad que exige la norma para su decreto, que al menos se cumpliría, de acuerdo con la suspensión de términos aludida, el 30 de julio de 2022.

Como corolario, en el sub júdece, para el momento en que la codemandada presentó la solicitud de terminación del proceso por desistimiento tácito, no se había cumplido el período de dos (2) años de inactividad que prescribe el literal d) del artículo 317 del C. General del Proceso, para la procedencia de la mencionada figura, por tanto, no procedía su decreto como lo definió el *a quo*.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada, pero por las razones aquí esgrimidas, y se condenará en costas a los recurrentes.

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN, el seis de mayo de 2022, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por el BANCO DE BOGOTÁ, en contra de GRECO ASESORES S.A.S., ELMER TORRES CASTRO Y NINFA MARGARITA GRECO VERGEL.

Se condena en costas a los codemandados ELMER TORRES CASTRO y NINFA MARGARITA GRECO VERJEL, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia. Como agencias en derecho se fija

la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M.L. (\$1.160.000).

**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**

A handwritten signature in black ink, reading "MARIO GÓMEZ LONDOÑO". The signature is stylized, with the first letters of each word being capitalized and prominent.

**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**  
Magistrado